

santa cruz decerca /02

AÑO I. TRIMESTRAL
MAYO/AGOSTO 2022

UNA PUBLICACIÓN DE **UNIDAS PODEMOS**

EMMASA:

SAQUEO DE 33 MILLONES



Sacyr pagó 60,2 millones de euros al Ayuntamiento de Santa Cruz a cambio de explotar EMMASA, la empresa municipal del agua, durante 25 años. Luego decidieron que EMMASA devolvería 59 millones a Sacyr. Ya han pagado 33,6 millones. Ahora la justicia investiga la denuncia de Unidas Podemos.

E

ENTREVISTA

PAG. 10

SANTIAGO GUTIÉRREZ:
"LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
LEGALIZA LA CORRUPCIÓN"

A

ANÁLISIS

PAG. 12

**EL EFECTO DE LA
PRIVATIZACIÓN:**
SOBRECOSTOS Y DESCONTROL

R

REPORTAJE

PAG. 14

**SEGURIDAD PRIVADA
MUNICIPAL: OTRA VEZ
SIN COBRAR EL SUELDO**

D

DOSIER

EMMASA, UN NUEVO CASO DE CORRUPCIÓN

EL CASO DE CORRUPCIÓN DE LAS TERESITAS QUE LLEVÓ A MIGUEL ZEROLO A LA CÁRCEL NO ACABÓ AHÍ. UNIDAS PODEMOS AFIRMA QUE LA PRIVATIZACIÓN DE EMMASA SIRVIÓ PARA TAPAR EL AGUJERO DE LA COMPRA DEL FRENTE DE PLAYA



L

a empresa que gestiona el ciclo del agua en Santa Cruz de Tenerife, EMMASA, fue dirigida por el Ayuntamiento hasta que Coalición Canaria decidió privatizarla. De modo que, en 2006, la empresa adjudicataria, Sacyr-Vallehermoso, pagó al Ayuntamiento 60,2 millones de euros a cambio de explotar la gestión del agua durante veinticinco años.

Sin embargo, en junio de 2007, el Consejo de Administración de Sacyr-EMMASA decidió que 59 millones, de esos 60,2 millones del precio, no eran **precio**, sino **adelanto**. Es decir, acordaron, de forma presuntamente ilegal, devolver, a lo largo de 25 años, 59 millones

de euros que Sacyr había pagado como precio. De esa manera, hasta abril de 2020, Sacyr-Vallehermoso obtuvo 33,6 millones de euros de nuestros bolsillos a cambio de nada. Además, también habían decidido pagar a Sacyr un 5,05% de interés por el falso préstamo.

En 2021, Unidas Podemos denunció este grave caso en los juzgados y en la Fiscalía. Y, a raíz de esa denuncia, la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife interpuso su propia denuncia sosteniendo que la decisión de devolver los 59 millones de euros no tuvo base legal y supondría que Sacyr-Vallehermoso, "al finalizar el

D

período de vigencia del contrato [para explotar la gestión del agua en Santa Cruz] no habría incurrido en gastos beneficiándose en consecuencia de la gestión de un servicio público a coste cero". Es decir, Sacyr recuperaría los 60,2 millones de euros porque, además de los 59 millones mencionados, los restantes 1,2 millones estaba previsto devolverlos a Sacyr, al acabar la concesión, porque era el precio de las acciones de EMMASA que se devolverán al Ayuntamiento.

A raíz de la denuncia de UP, cinco personas han sido imputadas por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre ellas el ex alcalde, Miguel Zerolo, el actual secretario del Ayuntamiento, Luis Prieto, y Pablo Abril-Martorell Hernández, directivo de Sacyr.

Entretanto, el papel del actual alcalde, José Manuel Bermúdez, no ha podido ser más impresentable. Para empezar, sin la denuncia de Unidas Podemos, nadie habría pedido responsabilidades en los juzgados por el que podría haber sido el caso de corrupción más grave de la historia del municipio: si hubieran logrado ingresar los 59 millones de euros (más intereses) habrían superado los 54 millones de euros del saqueo del caso Las Teresitas.

El alcalde Bermúdez nunca denunció este caso y, además, en abril de 2021, rechazó la moción de Unidas Podemos



Los tres concejales de Unidad Podemos, Dolores Espinosa, Luisa Tamayo y Ramón Trujillo

que pidió que el Ayuntamiento se personara como acusación particular ante el Juzgado de Instrucción. Y, por si fuera poco, el alcalde votó en dos ocasiones, en julio de 2020 y en marzo de 2022, en contra de la propuesta de Unidas Podemos de establecer una comisión de investigación para determinar por qué pudo cobrar Sacyr-Vallehermoso 33,6 millones de euros de EMMASA sin justificación legal, durante trece años, y a pesar de que Sacyr-EMMASA fue intervenida por el Ayuntamiento debido a la desastrosa gestión causada por la privatización que ejecutó Coalición Canaria. Bermúdez no quiere ni luz, ni taquígrafos, ni sacar lecciones para que no se repita lo sucedido. En la lucha contra la corrupción ni ha estado, ni se le espera. ■

EL ALCALDE JOSÉ MANUEL BERMÚDEZ NI HA ESTADO NI SE LE ESPERA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Efectos colaterales de la desastrosa gestión de Coalición Canaria

La gestión privatizada provocó una reducción de personal. Entre 2005 y 2017, EMMASA pasó de tener 206 personas empleadas a 189. Y los gastos de personal cayeron de 11,5 millones de euros al año a 10,4 millones. En ese período el beneficio antes de impuestos pasó de 876.353 euros a 2,8 millones de euros. Sin embargo, los beneficios de ese período habrían sido considerablemente superiores si EMMASA no hubiera estado devolviendo a Sacyr, año a año, una parte de los 59 millones de euros abonada de manera presuntamente ilegal. ■

D

DOSIER



José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Firma foto: Ramón de la Rocha/EFE

EL ALCALDE PREMIA LA MALA GESTIÓN

BERMÚDEZ NO DENUNCIÓ EL CASO, NI SE PERSONÓ COMO ACUSACIÓN, NI APROBÓ UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

E

l descontrol de la gestión privatizada del agua es tan grande que el alcalde José Manuel Bermúdez tuvo que contratar a una empresa para averiguar cuánto dinero había cobrado Sacyr-Vallehermoso de forma presuntamente ilegal. La empresa auditora determinó que lograron recaudar 33,6 millones de los 59 millones previstos y, además, se quejó de la falta de colaboración de EMMASA.

La ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife estuvo décadas sin pagar beneficios privados por la gestión del

ciclo del agua. Porque EMMASA era una empresa pública que funcionaba bien. Pero Coalición Canaria decidió que, entre 2006 y 2031, la gestión sería privada y la empresa beneficiaria podría sacar legalmente de los bolsillos de la población más de 200 millones de euros en beneficios. Esto es corrupción legal: hacer pagar a la sociedad beneficios millonarios, para cuatro adinerados, por un servicio que se había prestado, durante décadas, sin ese coste extra. Se trató de un





“impuesto revolucionario” establecido por esa misma Coalición Canaria que siempre presume de bajar impuestos. No olvidemos que la corrupción es un “abuso del poder público para obtener beneficios privados”, que puede ejercerse dentro o fuera de la ley, o, como pudiera ser en este caso, dentro y fuera de la ley.

La gestión privatizada fue tan desastrosa que, en diciembre de 2014, el grupo de gobierno acodó intervenir la empresa por los incumplimientos del contrato adjudicado. Una Sentencia del Juzgado de lo

trarlo justificado. Pues bien, el día 4 de abril de ese año, Bermúdez pidió al Ejecutivo que anulara la decisión y le permitiera subir la tarifa. El alcalde afirmó que la decisión del Gobierno era “contraria a los principios de traslación del coste efectivo de los servicios a los usuarios”. Y temía que Sacyr reclamara subir la tarifa del agua en los tribunales y que ganara. Obviamente, gracias a que CC puso de rodillas al Ayuntamiento, ante la empresa multinacional, cuando privatizó la gestión del agua.

Coalición Canaria abusó de la confianza que le otorgó la ciudadanía privati-

(Sin)razones de la privatización

En 2005, el Ayuntamiento de Santa Cruz decidió privatizar la empresa pública del ciclo del agua, EMMASA, aunque daba beneficios. La gestión privada comenzó el día 1 de marzo de 2006, después de que Sacyr-Vallehermoso abonara los 60.274.145,22 euros del precio por gestionar el agua hasta 2031.

En 2001, el gobierno de Coalición Canaria había pagado 52 millones de euros por la compra ilegal del frente de playa de Las Teresitas, la mayor operación de corrupción de la historia de Santa Cruz de Tenerife. Ese pago se hizo dando de baja partidas presupuestarias no comprometidas, agotando el remanente líquido de Tesorería y concertando un préstamo por 18,4 millones de euros con CajaCanarias. Y, para resolver ese “agujero” el concejal de Hacienda, Guillermo Núñez, elaboró un plan económico que incluía la privatización del agua. Núñez y Zerolo fueron condenados, por prevaricación, en el caso García Cabrera (en el que Izquierda Unida ejerció la acusación particular). Taparon el agujero de Las Teresitas vendiendo EMMASA y, posteriormente, Zerolo decidió devolver a Sacyr el dinero ingresado por vender EMMASA.

En junio de 2007, después de que el Ayuntamiento recibiera 60,2 millones por la privatización del agua, el Consejo de Administración de Sacyr-EMMASA decide devolver a Sacyr, en veinticinco plazos, 59 millones de euros de los 60,2 millones. Un informe de Francisco Villar Rojas, catedrático de la Universidad de La Laguna, según la Fiscalía, pretendió “dar una apariencia de legalidad” a devolver los 59 millones. ■

ESTO ES CORRUPCIÓN LEGAL: HACER PAGAR A LA SOCIEDAD BENEFICIOS MILLONARIOS POR UN SERVICIO QUE SE PRESTÓ DURANTE DÉCADAS SIN ESE COSTE EXTRA

Contencioso-Administrativo de Santa Cruz, de enero de 2017, estableció que Sacyr-EMMASA incumplió la prohibición de subcontratar con empresas del mismo grupo y el deber de informar al Ayuntamiento sobre planes de inversión y otras cuestiones. Una auditoría externa de 2014 estimó que las subcontrataciones indebidas causaron un daño de más de cinco millones de euros. Sacyr tampoco cumplió con las inversiones comprometidas que, en la actualidad, siguen siendo insuficientes y habrá que ver si dejan más o menos descapitalizada la empresa cuando vuelva a manos públicas en 2031.

Sin embargo, como premio a la mala gestión de Sacyr-EMMASA, en julio de 2016, el gobierno de Bermúdez aprobó una subida de la tarifa del agua. En enero de 2017, el gobierno de Canarias rechazó ese aumento por no encon-

zando la empresa pública del agua para enriquecer a unos pocos a costa de toda la sociedad. La mala gestión privatizada sirvió para extraer rentas de la población para obtener beneficios privados; para destruir empleo en la empresa que gestiona el ciclo del agua; para imponer cobros por contadores contra incendios a comunidades de vecinos que no existían cuando la gestión era pública; para, además, tratar de ganar 59 millones de euros, de manera presuntamente ilegal, provenientes de la ciudadanía; para tener que soportar la peor gestión posible del agua hasta 2031; para obligar al Ayuntamiento a gastar recursos públicos en auditorías, asesoramiento legal e intervención de la empresa por sus graves deficiencias. Y aún así, a pesar de una gestión tan nefasta, el alcalde no quiere comisiones de investigación, ni personarse como acusación particular en la causa penal abierta en los juzgados. ■

D

DOSIER

Sacyr creyó que el descontrol del Ayuntamiento genera un derecho al saqueo

La privatización del ciclo del agua en Santa Cruz de Tenerife permitió a Sacyr-Vallehermoso controlar EMMASA, la empresa municipal del agua, que dejó de ser pública y se convirtió en mixta. Pues bien, una de las grandes incógnitas del caso Sacyr-EMMASA es cómo fue posible cobrar 33.630.000 euros sin base legal y sin que nadie lo denunciara. Es incomprensible que no se señalara esta grave irregularidad al formular las cuentas anuales o, al menos, cuando la empresa fue intervenida por el Ayuntamiento por la mala gestión. Y, dado que el alcalde Bermúdez ha decidido que no habrá comisión de investigación sobre lo sucedido, esta incógnita se mantendrá mientras Coalición Canaria siga gobernando en Santa Cruz de Tenerife.

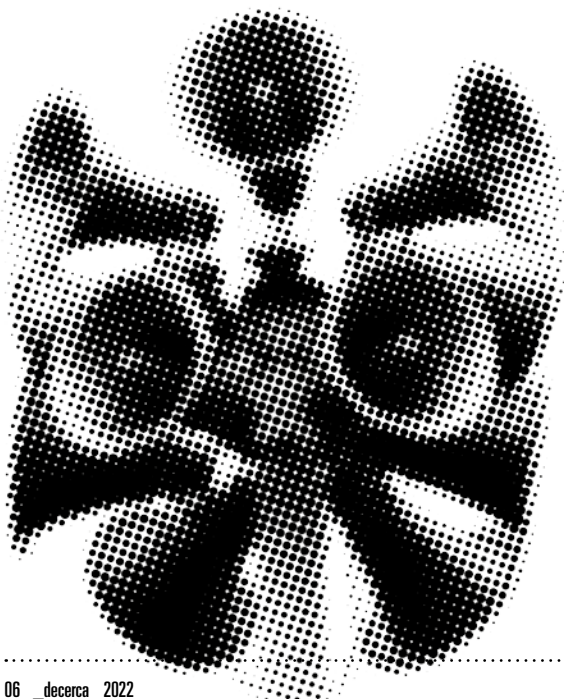
El descontrol de los pagos irregulares de EMMASA a Sacyr, por parte del Ayuntamiento, permitió que Sacyr alegara su "transparencia y buena fe [...] a la hora de reflejar la operación en la documentación aportada anualmente". Sacyr nunca ocultó, durante trece años, sus actos de corrupción transparente. Por eso, defendió que, si el Ayuntamiento nunca había cuestionado que se le devolviera el precio pagado por la concesión, pues entonces Sacyr tenía derecho a quedarse con los 33,6 millones de euros cobrados de manera irregular. Implícitamente, Sacyr reclamó que, si un saqueo de dinero ajeno se refleja correctamente en las cuentas de la empresa, se genera un derecho al saqueo.

13 años

La multinacional Sacyr nunca ocultó, durante trece años, sus actos de corrupción transparente

59 millones

La cifra que EMMASA debía pagar a Sacyr fue estipulada en 59 millones de euros. Transformaron el precio de la privatización en deuda



Unidas Podemos Santa Cruz

TU VOZ
EN EL AYUNTAMIENTO

D

2006

EMMASA se privatiza para tapar el agujero dejado por la compra corrupta del frente de playa de Las Teresitas

2018

Once años después de que comenzara el saqueo, el director de Servicios Públicos descubre los pagos

Sin embargo, en junio de 2007, Sacyr había puesto en evidencia su mala conciencia en aquel Consejo de Administración de Sacyr-EMMASA que decidió que EMMASA le iba a devolver a Sacyr 59 millones de euros del precio pagado al Ayuntamiento por explotar el ciclo del agua durante 25 años. José Pérez Ventura, el abogado que redactó la denuncia de Unidas Podemos, señala que no sólo decidieron devolver 59 millones a Sacyr, transformando el precio de la privatización en deuda de EMMASA con Sacyr, sino que, además, acordaron “hacer renuncia expresa, para ahora y en lo sucesivo”, a revisiones extraordinarias de las tarifas del agua causadas por tener que ir pagando a Sacyr los 59 millones de una operación presuntamente delictiva.

Es decir, en 2007, Sacyr-EMMASA se comprometió a no subir la tarifa del agua por los efectos económicos del pelotazo de los 59 millones de euros. Sin embargo, en 2011, la empresa empezó a pedir el reequilibrio de la concesión o la subida de las tarifas del servicio. Esa adicción de Sacyr al dinero provoca que el Ayuntamiento encargue una auditoría que, en febrero de 2019, advierte de posibles pagos irregulares a Sacyr. Por su parte, el director general de Servicios Públicos del Ayuntamiento descubrió esos pagos en 2018. Todo parece indicar que fue la insaciable codicia de Sacyr-Vallehermoso, con sus peticiones de subida de tarifas, lo que acabó provocando que se descubriera el cobro irregular de 33,6 millones de euros. ■

**HAZNOS LLEGAR
TUS SUGERENCIAS,
DENUNCIAS Y
PROPUESTAS**

¡CONTÁCTANOS!



@unidaspodemos.santacruz



www.unidaspodemossantacruz.es



922 60 68 83



grupo.unidaspodemos@santacruzdetenerife.es
unidaspodemossantacruz@gmail.com

D

DOSIER



Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos en Santa Cruz

SI ESTE CASO DE CORRUPCIÓN NO QUEDA IMPUNE SERÁ GRACIAS A UNIDAS PODEMOS

¿Qué importancia tiene el caso Sacyr-EMMASA?

Por la cuantía del dinero saqueado es el segundo caso de corrupción más grave de la historia de Santa Cruz. Sacyr se llevó 33,6 millones de euros de la empresa municipal del agua. Y esto no lo denunció en el Juzgado el alcalde Bermúdez, sino Unidas Podemos. Si este caso no queda impune será gracias a Unidas Podemos.

Por otra parte, lo más llamativo de este caso es el descaro. Sacyr pagó 60,2 millones de euros por controlar EMMASA durante 25 años y EMMASA decidió, de manera presuntamente delictiva, devolver a Sacyr 59 millones de ese precio a lo largo de esos 25 años. Y esto era público,

D

estaba en los estados de cuentas anuales y nadie lo denunció durante trece años.

¿No existen controles en el Ayuntamiento? ¿Cómo es posible que pasara desapercibido durante trece años el pago anual de 2,3 millones ya se han pagado 33,6 millones e iban a llegar a 59?

el Ayuntamiento se persone como acusación particular. No hacen absolutamente nada para combatir la corrupción.

¿Y qué debe hacer el Ayuntamiento para acabar con la corrupción en la gestión del agua?

Personarse como acusación particular en el Juzgado. Y resolver

¿Cuál es el problema de la gestión privatizada?

En muchos casos se trata de corrupción legalizada. Pagamos más por el mismo servicio, o por un servicio peor. Por ejemplo, el nuevo contrato de mantenimiento del alumbrado y de los colegios cuesta 700.000 euros anuales más por tener gestión privatizada debido al beneficio industrial y el IGIC. Hemos visto graves vulneraciones de derechos laborales del personal de seguridad y de mantenimiento de piscinas porque están privatizados. Cuando la gestión es pública no se sufren esos abusos laborales.

¿Cuál es la privatización más importante llevada a cabo por el Ayuntamiento de Santa Cruz?

El servicio de la limpieza, que se le ha dado a Valoriza, una empresa multinacional. Aunque la ley permite dividir la contratación para beneficiar a las pymes locales, Coalición Canaria prefiere a las empresas multinacionales. Donde haya una empresa multinacional que se quite la empresa canaria. Ni gestión pública, ni empresas canarias. Valoriza se comprometió a no superar las 40 quejas al mes y ha superado las 500 quejas mensuales. ■

COALICIÓN CANARIA Y EL PARTIDO POPULAR SE NIEGAN A INVESTIGAR. NO HACEN NADA PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN

CC PREFERE CONTRATAR A EMPRESAS MULTINACIONALES PARA ESTOS SERVICIOS QUE A EMPRESAS CANARIAS

Los controles no han funcionado a pesar de que EMMASA fue intervenida por el Ayuntamiento. Por eso Unidas Podemos pidió una comisión de investigación para saber qué falló y qué hacer para que no se repita. No sabemos qué ha fallado. Pero Coalición Canaria y el Partido Popular se niegan a investigarlo. También rechazaron que

el contrato por las irregularidades, los incumplimientos y los abusos cometidos en la etapa privatizada. No podemos esperar al fin de la concesión, en 2031, porque EMMASA puede quedar descapitalizada. La gestión del agua debe ser pública cuanto antes porque es menos costosa, más eficaz y evita la corrupción.

La privatización de los cementerios nos cuesta 600.000 euros anuales

Santa Cruz privatizó sus cementerios y paga más de 600.000 euros anuales. En Madrid, el último año de privatización de cementerios supuso pérdidas por 230.000 euros y el primero de gestión pública beneficios por 4,1 millones.

La ciudad obtiene 2 millones al año tras haber recuperado la recaudación

Santa Cruz tuvo privatizado el cobro de impuestos en período voluntario durante 21 años. Volver a la gestión pública ha ahorrado unos dos millones de euros al año y ha mejorado la capacidad recaudatoria.

Los parkings privados hacen pagar hasta un 66% de sobreprecio

Los aparcamientos privatizados en Santa Cruz hacen pagar hasta 66% de sobreprecio. Madrid remunicipalizó el parking de Plaza de España y, sin subir el precio, pasó de ingresar 19.000 euros anuales a más de un millón.

D

DOSIER



Santiago Gutiérrez experto en gestión del agua y responsable de la empresa pública Chiclana Natural

“LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA LEGALIZA LA CORRUPCIÓN”

L

os casos de corrupción con la privatización de servicios públicos están a la vista. De ahí que, para el exconcejal de Izquierda Unida en Medina Sidonia (Cádiz), y experto en gestión del agua, Santiago Gutiérrez, resulta “evidente que los sistemas privados son especialmente vulnerables” a este problema, “cuando no directamente legalizan fórmulas de corrupción”.

De hecho, advierte de que “la gente debe saber” que multinacionales como Sacyr, concesionaria del agua en Santa Cruz, están en realidad “prácticamente controladas por fondos de inversión, por fondos buitres”.

Por eso, en Medina Sidonia, un municipio gaditano de 12.000 habitantes, en 2011 un gobierno de IU que consiguió la mayoría absoluta recuperó



En Medina Sidonia (Cádiz) devolvieron el agua a la empresa municipal. Mejoraron el servicio y bajaron precios



la gestión pública del agua, con el resultado de que el servicio no solo mejoró sino que dio beneficios, se hicieron inversiones muy necesarias y se aplicaron unas tarifas sociales más justas, incluyendo la implantación del consumo mínimo vital para las familias más necesitadas.

“Y lo hicimos en un año terrible, el de la Ley Montoro, la ley del déficit cero, en lo peor de la crisis financiera; cuando se liquidaba el sector público; ahora tenemos de las tarifas más bajas de la provincia: 12 euros al mes para una familia de 3 miembros, y podemos hacer una política social”.

Gutiérrez, licenciado en Ciencias Ambientales, doctor en Tecnología Ambiental y Gestión del Agua, ahora está al frente de la empresa pública Chiclana Natural SA y es vicepresidente de la Asociación Española de Operadores públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS).

A su juicio, Santa Cruz también podría dar este paso, porque “cuanto más grande es la ciudad, mejor funciona la gestión pública del agua, por economía de escala”.

Si además en el caso chicharrero EMMASA daba beneficios en manos públicas y han sucedido tantos perjuicios con la privatización, la conveniencia de volver a la gestión pública la ve aún más clara. ■

“El cambio de gestión privada a pública no es solo por ideología política: es la mejor alternativa económica”

En el caso Medina Sidonia, subraya Santiago Gutiérrez, se demostró que los beneficios que antes se llevaba una empresa multinacional ahora se emplean en mejorar infraestructuras y aplicar tarifas sociales. “El agua es un bien común que no puede ser objeto de apropiación en beneficio de intereses privados”.

Proteger el interés público

En Medina Sidonia, recuperar la gestión pública del agua permitió implantar el suministro mínimo vital, garantizándolo a familias en exclusión social. Un importante avance en plena crisis financiera, que se introduciría años después, en 2019, en la legislación andaluza.

Santiago Gutiérrez subraya que en Medina Sidonia, el gobierno de IU en 2011 empezó a tratar el agua como derecho humano, según lo declaró en 2010 Naciones Unidas. “Ahora estamos en el contexto de la Agenda 2030, en la que el agua es un bien fundamental que debe llegar a toda la ciudadanía a precios asequibles”, por lo que resulta “muy grave mercantilizarlo”.

Precisamente esta nueva concepción del agua cree que va a facilitar procesos de remunicipalización: “Se impondrá volver a la gestión pública con la realidad de los hechos, ni siquiera por cuestión ideológica o política, sino pragmática, pues estamos en otro momento histórico: se ha abandonado la austeridad y con la crisis del covid muchas personas han vuelto a ser conscientes de la importancia de lo público”.

En el caso de Santa Cruz, le asombra que se pretendiera devolver a Sacyr los 59 millones que pagó por EMMASA: “Los cánones se amortizan durante el periodo de vida del contrato, y por tanto no se pueden devolver, son entregas al Ayuntamiento”. ■



EL FIASCO DE LAS PRIVATIZACIONES

LA PÉRDIDA DE CONTROL PÚBLICO SOBRE LA LIMPIEZA Y LOS PARKINGS HA EMPEORADO Y ENCARECIDO EL SERVICIO

L

a privatización de servicios públicos en Santa Cruz por gobiernos encabezados por CC está jalonada de incumplimientos, mala gestión y corrupción. No solo el agua está en la picota, también la limpieza y recogida de residuos sólidos, y los parkings.

En el caso de la limpieza, Unidas Podemos denuncia el “fracaso” de la concesionaria, Valoriza, porque, tras dos años de una cuestiona-

da adjudicación, el servicio es “extremadamente deficiente, con incumplimiento de los objetivos”, y las quejas, en vez de reducirse, aumentan.

Nadie con dos dedos de frente contrata a una empresa si sabe que va a incumplir su oferta. Pero es lo que ha hecho el Ayuntamiento con esta multinacional. Tres técnicos





municipales del Servicio de Calidad avisaron durante la licitación de que no podría cumplir los objetivos de calidad por los que recibió la máxima puntuación, pues su oferta en este apartado era temeraria. El motivo: no preveía suficiente personal. De hecho, la empresa que quedó segunda ofrecía 526

ya se sabía de antemano que esta empresa no sería capaz de mejorar.

Además, hasta marzo pasado, los incumplimientos habían hecho que se penalizara a Valoriza con más de medio millón de euros. Y ha pedido además al Ayuntamiento un reequilibrio de la concesión por casi un millón anual.

“ SANTA CRUZ ESTÁ SUCIA. LAS QUEJAS CIUDADANAS AUMENTARON EL 27% EN 2021. 553 RECLAMACIONES AL MES

puestos de trabajo, en vez de los 435 de Valoriza, que, de cinco concursantes, fue la que hizo la peor oferta laboral.

Lo que ya ha quedado claro es que la advertencia de los técnicos municipales se cumplió al pie de la letra: las quejas ciudadanas aumentaron el 27% en 2021, lo que multiplica por 14 el tope de 40 al mes al que se comprometió Valoriza. Y la mitad tiene que ver con la recogida de enseres, precisamente una de las tareas que

Esta petición obedece a que en su día ofertaron el servicio bajando el precio más de dos millones de euros. En suma no habrá un buen servicio de limpieza para la ciudad.

Las privatizaciones hechas por Coalición Canaria no han mejorado el servicio -incluso lo han empeorado-, han precarizado a su personal, son más caras a la larga para las arcas públicas y dificultan, cuando no impiden, unas tarifas más justas para la población más vulnerable. ■

Los parkings continúan sin cumplir

Tan preocupante como el desastre con la gestión privada del agua es lo que ocurre con los ‘parkings’ públicos que explotan empresas privadas en Santa Cruz. En 2017, un informe municipal constató un rosario de infracciones de las empresas adjudicatarias de los aparcamientos.

Estos incumplimientos denunciados el mandato pasado por Izquierda Unida y ahora por Unidas Podemos van desde cánones que no se pagan en años y que se liquidan de golpe sin abonar intereses de demora, hasta la construcción de más o menos plazas de las recogidas en el proyecto sin justificación, usos prohibidos explícitamente por las condiciones del contrato o concesiones a terceros sin permisos municipales, una infracción que supone la pérdida de la explotación. Los 9 parkings municipales analizados entonces fueron los ubicados Weyler, Tomás Cano, Valentín Sanz, Puente Serrador, Puerto Escondido, la Recova, el Estadio, Ramón y Cajal y Avenida de Anaga. ■

El aparcamiento de Puente Serrador, explotado por la familia Plasencia: 400.000 euros cobrados de más

Entre las muchas irregularidades que han cometido las concesionarias de aparcamientos públicos, el ubicado junto al Puente Serrador, que explota la familia de Antonio Plasencia, lleva años cobrando 1,96 euros por hora cuando la tarifa máxima permitida, para 2022, es de 1,18. La cantidad total indebidamente cobrada podría superar 400.000 €, dinero del que no recuperarán ni un céntimo ni las personas usuarias del parking ni las arcas públicas. Sorprende que el Ayuntamiento haya tardado 5 años en actuar contra estos incumplimientos, que se conocían desde 2017.

R

REPORTAJE

EL SERVICIO DE VIGILANCIA VUELVE A LA PRECARIEDAD

UN AÑO MÁS, LOS IMPAGOS SE CEBAN CON LA PLANTILLA DE SEGURIDAD PRIVADA QUE TRABAJA EN EL AYUNTAMIENTO. LA ESTABILIDAD SALARIAL NO ALCANZA A UN COLECTIVO GOLPEADO POR EMPRESAS E INSTITUCIONES QUE NO CUMPLEN



L

a plantilla de vigilantes de empresas contratadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz sufre precarias condiciones laborales. Los retrasos en el pago de salarios son moneda común y en ocasiones deben afrontar meses sin cobrar, lo que empuja a estos trabajadores y trabajadoras a solicitar ayudas a los servicios sociales para sobrevivir.

La concejala de Unidas Podemos Dolores Espinosa, vigilante de profe-

sión y sindicalista de este sector, ha denunciado de forma reiterada esta situación, que atribuye tanto a mala gestión empresarial -con ofertas a la baja que acaba pagando el personal- como a los pliegos de condiciones de los concursos públicos, que priman solo la oferta más barata y no reparan en la calidad del servicio ni el respeto a los derechos laborales.

En los últimos meses el impago de nóminas -que ya pasó con Seguridad

R

Integral Canaria y Ralons- golpea a vigilantes de SH Lanzarote, que vigila edificios municipales.

Y seguirá ocurriendo, con recientes decisiones como la del Organismo Autónomo de Fiestas, al contratar a Segurmáximo SL, pese a que la propia Mesa de Contratación vio su oferta anormalmente baja en retribuciones de la hora nocturna a su personal y a que la legislación impide contratar a empresas con condiciones salariales inferiores a las fijadas en el convenio sectorial o nacional.

Espinosa propuso en un Pleno que el Ayuntamiento gestione directamente la vigilancia de sus edificios, para garantizar los derechos de este colectivo laboral y ahorrar costes a la Administración pública. La Ley 5/1014 de Seguridad Privada permite esta opción, de modo que el Ayuntamiento crearía un departamento de seguridad y elaboraría un plan al que debería dar el visto bueno el Ministerio del Interior. De hecho, en Alicante, con 331.000 ha-



Dolores Espinosa, concejala de UP y vigilante

bitantes, la plantilla de vigilantes ya se gestiona desde la Policía Local.

Pero la propuesta de UP fue rechazada por el gobierno de Bermúdez (CC-PP), alegando «razones ideológicas». “Un argumento inaceptable”, subraya la representante de UP, “pues hay familias que ya pasaron por 9 meses sin cobrar con Seguridad Integral Canaria y ahora vuelven a vivir la misma pesadilla con otra empresa”. ■

HAY FAMILIAS QUE VIVIERON 9 MESES SIN COBRAR CON SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA. AHORA VUELVEN A LA MISMA PESADILLA

“Hay que dignificar ya las condiciones del colectivo de vigilantes”

La concejala de Unidas Podemos Dolores Espinosa, vigilante de profesión, afirma que en este sector la precariedad es “dramática” y lamenta que el gobierno de Jose Manuel Bermúdez (Coalición Canaria) rechace estudiar la gestión directa del servicio, pese a la “urgencia de dignificar” las condiciones de este colectivo.

La edil afirma que sintió “vergüenza ajena” por la “bochornosa” pérdida de papeles del concejal de CC Alfonso Cabello en una Comisión de Control al dirigirse a ella con gritos, malos modos, y “mentiras” cuando se debatía el impago de nóminas en la empresa SH Lanzarote.

Una sorprendente reacción de Cabello cuando Espinosa demostró que sí existía un documento de la Tesorería de la Seguridad Social que el concejal de CC había negado días antes, pese a que ya estaba notificado al Ayuntamiento. ■



El alcalde José Manuel Bermúdez practica un “efecto Robin Hood” pero al revés

EL TRILERISMO FISCAL DE COALICIÓN CANARIA SUBE EL IBI AL HOSPITAL

>**RAMÓN TRUJILLO** : PORTAVOZ DE UNIDAS PODEMOS EN SANTA CRUZ

El alcalde Bermúdez vuelve a presumir de bajar impuestos y tasas. El Ayuntamiento deja de ingresar 746.366 euros para rebajar la tasa de basuras ¡68 céntimos al mes! por familia. Esto da para un barraquito bimensual... Pero se llama Bonificación para “fomentar la recuperación económica de las familias”. También rebaja en 2 millones de euros la tasa de residuos a empresas, vayan bien o vayan mal. Pero solo rebajan 36.134 euros en bonificaciones de la basura a familias vulnerables. El 1,2% de 2,8 millones de euros en bonificaciones...

La bajada fiscal se compensa con una subida fiscal: el Hospital de La Candelaria pagará 253.838 euros más por IBI. El Ayuntamiento recaudará 2,3 millones de euros más por incremento del IBI a “grandes propietarios”. Lo llaman “efecto Robin Hood” y agrada a la patronal CEOE. Y es que esos “grandes propietarios” somos la ciudadanía: más del 80% será dinero público recaudado por edificios públicos. Así es el trilerismo fiscal ultraperiférico. ■

UNA PUBLICACIÓN DE UNIDAS PODEMOS SANTA CRUZ DE TENERIFE.

WEB: WWW.UNIDASPODEMOSSANTACRUZ.ES

FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/UNIDASPODEMOSSANTACRUZ TWITTER: @UNIDASPODEMOSSC

CORREO ELECTRÓNICO: UNIDASPODEMOSANTACRUZ@GMAIL.COM TELÉFONO GRUPO MUNICIPAL: 922 60 68 83